

Ciudad de México, 5 de setiembre de 1977.-

Sr. Presidente de
UDUAL

Dr. Efraín del Pozo
Srío. General
Ciudad Universitaria,
Apartado Postal 70232
México, 20° D.F.

De nuestra consideración:

A 46 meses de la intervención de la Universidad de la República por parte del gobierno de facto, la enseñanza superior uruguaya ha quedado profundamente afectada, tanto en lo que se refiere al nivel científico-técnico como al eminente rol cultural y social que la Universidad ocupaba en el país.

La Universidad de la República resultó intervenida el 28 de octubre de 1973, aduciéndose muy burdos pretextos para adoptar la gravísima decisión de la cual no constan antecedentes en nuestra historia.

La Universidad de la República administra el más importante hospital del país; realiza más del 90% de la investigación científica y forma a la totalidad de los profesionales y científicos uruguayos.

La vigencia irrestricta del principio autonómico y sus normas complementarias indispensables: libertad de cátedra, acceso a la carrera docente por concurso y tolerancia filosófica, hicieron de la Universidad uruguaya una relevante expresión de la cultura latinoamericana.

La intervención político-militar de la Universidad le ha asestado un golpe de trágicas consecuencias.

Con la destitución de más de un millar de docentes, la suspensión de la investigación científica, el cierre de institutos enteros dentro de las facultades, y la diáspora universitaria que afecta a los cuadros docentes más calificados, puede afirmarse que no podrá recuperarse el antiguo nivel científico-técnico de la Universidad antes de muchos años e ingentes sacrificios y siempre con que contáramos con la inmediata normalización institucional del funcionamiento universitario.

Por otra parte, el cese de la institucionalidad democrática y de la vigencia de los derechos humanos que rige en el país desde hace cuatro años, también afecta en forma directa a la Universidad.

Científicos eminentes como el Profesor Emérito, Ing. José Luis Massera, sufren los más inicuos tormentos en los campos de concentración del régimen.

Estamos persuadidos de que la cultura y la ciencia latinoamericana puede contribuir poderosamente a la defensa de la educación uruguaya hoy en gravísimo deterioro.

Particularmente la UDUAL, sólida organización de la Universidad del continente, puede convertir el drama de la Universidad uruguaya en motivo de generosa preocupación para la cultura continental y realizar así un aporte sustancial a la lucha por obtener de las actuales autoridades un cambio de rumbo que ponga fin a la frustración y retroceso en que han sumergido a la educación y a la ciencia en nuestro pequeño país.

El próximo 28 de octubre -4º aniversario de la intervención político-militar de la Universidad- es una fecha oportuna para expresar todo el dolor y la indignación que esta situación produce en los medios científicos y educacionales de América Latina.

Nos permitimos darle a conocer algunas sugerencias en cuanto a las iniciativas que podrían adoptarse para esa fecha:

- 1º - La realización de una sesión simbólica de los consejos universitarios en solidaridad con la Universidad uruguaya, y aprobación de un llamamiento solidario.
- 2º - Reclamar ante las autoridades uruguayas el restablecimiento de las normas constitucionales de funcionamiento de la Universidad de la República.
- 3º - Reclamar ante las autoridades uruguayas la inmediata liberación de los docentes universitarios y profesionales presos, los cuales suman más de un centenar.
- 4º - Envío de las notas de protesta a las comisiones de los Derechos Humanos de ONU y OEA y a la presidencia de UNESCO.

Iniciar ante la UNESCO gestiones tendientes a obtener de esta organización un pronunciamiento sobre la situación por la que atraviesa la Universidad de la República.

La obtención de un pronunciamiento solidario de UDUAL.

Sin otro particular, lo saluda con el mayor respeto,



Prof. Alberto Sierra
Srio. de la Coordinadora de
Gremiales de la Enseñanza,
en el exterior.

México, 27 de octubre de 1977.

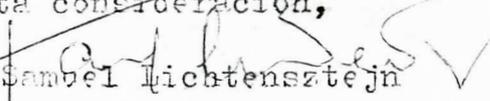
Sr. Secretario General de la
Unión de Universidades de América Latina
Dr. Efrén C. del Pozo
Presente

De nuestra mayor consideración:

La Universidad de la República Oriental del Uruguay durante el mandato de sus autoridades constitucionales y legales fue miembro de UDUAL. La desafiliación se produjo durante el mandato de autoridades de facto que gobiernan hoy dicha Universidad. Hace hoy cuatro años que se produjo la intervención militar que terminó con la autonomía constitucionalmente establecida y que impuso normas autoritarias reñidas con toda la tradición universitaria. Prisión de las autoridades legales, persecución generalizada de los docentes, estudiantes y trabajadores (igualmente con prisión de muchos de ellos, con violación reiterada y grave de derechos humanos), eliminación de Institutos científicos de reconocida significación, discriminación ideológica aguda, supresión de carreras y de asignaturas fundamentales - especialmente en el campo de las ciencias sociales, quema y destrucción de libros y de bibliotecas universitarias científicas, son actos por demás atentatorios contra la cultura, que configuran la liquidación de la Universidad misma; Universidad de la República que había, a través de sus sólidas tradiciones, de su inserción popular y de su nivel de estudio e investigación, alcanzado un lugar destacado.

Vista dicha situación, los abajo firmantes solicitamos a la Unión de Universidades de América Latina difunda el hecho de la intervención producida, de la supresión de la autonomía, justamente hoy a cuatro años de la misma. Asimismo que lleve a cabo los actos que estime del caso con relación a la referida situación.

Saludamos a Ud. con la más alta consideración,


Samuel Lichtensztejn
ex-Rector de la
Universidad de la República


Mario H. Otero
ex-Decano de la Facultad
de Humanidades y Ciencias

TOMO VI: 73 ■ Enrique Leff. UNIVERSIDAD Y DEPENDENCIA TECNOLÓGICA; 74 ■ Gerardo Viloria Varela. GRUPOS DE PROFESION FORMA DE PARTICIPACION POLITICA; 75 ■ Carlos Tunnerman B. LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA; 76 ■ Félix Schwartzmann, Eduardo Novoa. DEBATE SOBRE LA REFORMA UNIVERSITARIA EN CHILE (1969); 77 ■ Miguel Bueno. FUNCION ACADEMICA Y POLITICA DE LA UNIVERSIDAD; 78 ■ Larissa Lomnitz. LA ANTROPOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA UNAM; 79 ■ Galo Gómez Oyarzún. LA UNIVERSIDAD: SUS ORIGENES Y EVOLUCION; 80 ■ Carlos M. Rama. ELEMENTOS PARA UNA SOCIOLOGIA DEL TOTALITARISMO; 81 ■ Jorge Mario García Laguardia. LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA; 82 ■ Arturo González Cosío. LA VIDA COTIDIANA; 83 ■ Henrique González Casanova. UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL NORTE; 84 ■ Marcelo Robert Tsutomu Sakamoto. LA EVALUACION DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS Y SU PERSPECTIVA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO.
TOMO VII: 85 ■ Pablo Latapí. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD. UN ENFOQUE BASADO EN LAS EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS.



RECTOR
DR. GUILLERMO SOBERON ACEVEDO
SECRETARIO GENERAL ACADEMICO
DR. FERNANDO PEREZ CORREA
SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO
ING. JAVIER JIMENEZ ESPRIU
COORDINADOR DE HUMANIDADES
LIC. JORGE CARPIZO MCGREGOR
**CENTRO DE ESTUDIOS
SOBRE LA UNIVERSIDAD**
LIC. ELENA JEANNETTI DAVILA

DESLINDE

CUADERNOS DE CULTURA POLITICA UNIVERSITARIA

FEBRERO 1977 **86** PRECIO \$ 3.00

LA UNIVERSIDAD URUGUAYA BAJO LA DICTADURA

OSCAR J. MAGGIOLO



CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD
COORDINACION DE HUMANIDADES

UNAM

Óscar J. Maggiolo
LA UNIVERSIDAD URUGUAYA
BAJO LA DICTADURA

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE HUMANIDADES
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD

En el periodo quizás más delicado de las relaciones entre la Universidad uruguaya y el gobierno del país, cuando los ataques a la enseñanza superior arreciaron, cuando el proceso de fascización —que culminara en junio del 73— estaba en pleno desarrollo, le tocó al Ing. Oscar J. Maggiolo el riesgoso honor de ser Rector de aquella. Lo hizo con la lucidez y la valentía que eran estrictamente necesarias pero que él puso de manifiesto en forma decisiva, intensa. Tanto cuando en las madrugadas los grupos fascistas intentaban entrar vandálicamente en los recintos universitarios como cuando las fuerzas represivas buscaron infructuosamente —pero no sin saña— pruebas de conspiraciones imaginarias, cuando en realidad la Universidad molestaba por ser el testigo no mudo, incomodante, de la regresión del país, Maggiolo estuvo al frente de la Universidad. Ni su reconocida autoridad como técnico y como investigador en problemas de hidráulica —utilizada en varios países de nuestra América Latina—, ni su visión del desarrollo de su propia sociedad, igualaron su serena valentía. Sus capacidades intelectuales nos traen hoy, pasados aquellos álgidos momentos, un adecuado e imprescindible análisis de lo que llegó a ser la universidad bajo la dictadura y de cómo se compaginó el proceso de esa captura. El informe que aquí se presenta fue preparado para EULA 2 (Segundo Encuentro de Universidades Latinoamericanas, Caracas, 1976) a principios del presente año. Su difusión se ha hecho necesaria.

En junio de 1973, el presidente electo en el Uruguay en el acto comicial de 1971 con el 22% de los sufragios emitidos, apoyado por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento e instaló en el país un estado terrorista en el que las normas constitucionales y legales fueron suplantadas por la coacción violenta y el terror, impuesto a los habitantes de la República por medio de la prisión, la tortura y la muerte. Baste decir que en Uruguay, uno de cada cuatrocientos habitantes está preso por razones políticas; uno de cada cuarenta habitantes, ha sido detenido por las mismas causas; uno de cada sesenta habitantes, ha sido torturado, y uno de cada cinco habitantes, ha emigrado del país en los últimos cinco años, buscando trabajo y seguridad para él y sus hijos.¹ Estas cifras, proyectadas a otros países del Continente, significarían doscientos cincuenta mil presos políticos en Brasil, treinta mil presos políticos en Chile, sesenta y dos mil quinientos presos políticos en Argentina; en el caso más dramático de los países mencionados, Chile, la cifra previsiblemente correcta está comprendida entre el 15% y el 20% de las cifras uruguayas que hemos deducido.

Esto ha llevado a que el periódico *The New York Times* publicara, acerca del caso uruguayo, un editorial que denominó “Uruguay, terror único en el mundo”, reproducido por *El Nacional*, de Caracas, el 26 de marzo de 1976, y a que Amnesty Internacional decretara una campaña que ha terminado a fines de marzo de este año (1976), contra la tortura en el Uruguay.

En septiembre de 1973, tres meses después del golpe de Estado, se realizaron elecciones universitarias bajo una nueva ley, votada a principio del año, en la que la dictadura y sus sectores más adictos cifraban serias

¹ En un artículo que escribiéramos hace sólo sesenta días para el Boletín n. 1 del EULA (Encuentro de Universidades de América Latina en solidaridad con la Universidad Chilena), Caracas, diciembre de 1975, estas proporciones eran significativamente menores, lo que indica que a casi tres años del golpe facista, el terror y la tortura continúa como en los primeros días.

esperanzas de obtener un cambio en la composición del gobierno universitario. El voto se hizo obligatorio a profesores, egresados y estudiantes, con lo que se incorporaba, especialmente entre egresados y estudiantes, un número grande de votantes que en general se había abstenido y que se suponía que era contrario a la tendencia que gobernaba la Universidad. Sin embargo, el pronunciamiento fue favorable a la tendencia imperante en el gobierno universitario por abrumadora mayoría, y, por ende, fue, de manera aplastante, contrario a la dictadura.

Votaron un total de 36 961 personas, repartidas así: 22 233 estudiantes; 1 013 profesores y 13 715 profesionistas. El 89% de los estudiantes, el 76.3% de los docentes y el 56% de los profesionistas, se pronunció en favor de la tendencia que apoyaba al gobierno universitario, y el 98% de los estudiantes, el 80% de los docentes y el 88% de los profesionistas, votó contra la dictadura.

Los resultados de las elecciones realizadas el 12 de septiembre fueron proclamados oficialmente el 24 de octubre, si bien se conocían desde el mismo día de la elección. El 27 de octubre se hizo explotar una bomba en la Facultad de Ingeniería, donde perdió la vida un joven de nacionalidad española que cursaba estudios de Ingeniería Mecánica. Ese acontecimiento fue el pretexto de la dictadura para impedir que asumieran quienes acababan de ser electos; se encarceló al rector y a todos los decanos de las facultades, y se intervino la Universidad para comenzar una era de persecución y decadencia cultural y científica que, a dos años y medio de aquella fecha, conserva plena vigencia.

Debe notarse que la Universidad de la República, fundada en 1849, era la única en el país. No había otros institutos, públicos o privados, de enseñanza superior, por lo cual toda la formación de profesionales, y la abrumadora mayoría de la investigación científica

y tecnológica que se realizaba en el país, dependían de esa institución.

A diferencia de lo sucedido en otros países del Continente, nunca había sido intervenida, por lo que en ella se había formado una larga tradición académica que garantizaba una alta calidad, tanto en la docencia como en la investigación.

La Universidad era autónoma, y su gobierno lo sustentaron los profesores, los egresados y los estudiantes, quienes también elegían, directamente, al rector y a los decanos. Los estudiantes participaban en el gobierno de la Universidad desde 1908 (diez años antes de la Reforma de Córdoba), y desde 1958 tenían una representación de aproximadamente el 25% en el Consejo Directivo Central y en los Consejos de las Facultades. El rector y los decanos eran elegidos por la Asamblea General del Claustro y por las Asambleas de Claustro de las Facultades, con prescindencia de cualquier intervención del Poder Ejecutivo.

LA INTERVENCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS

La intervención la ejerció directamente quien, en el momento, ocupaba el cargo de ministro de Educación y Cultura de la dictadura, y era redactor responsable del diario fascista *El País*, principal órgano de información del régimen dictatorial. Su acción se centró en la persecución de los profesores universitarios, y nombró de inmediato más de trescientos funcionarios, jóvenes militantes de las organizaciones fascistas juveniles adictas a la dictadura.²

² Esta no es una afirmación subjetiva y efectista, sino que responde al conocimiento personal que de muchos de ellos tenemos. Uno de los designados, de apellido Aguirre, que ahora ocupa la jefatura de profesores adscritos del Liceo 14, dependencia de enseñanza secundaria, comandaba el grupo armado compuesto por unos veinticinco jóvenes que en una madrugada de agosto de 1972 ocupó el local central de la Universidad. Cuando tres horas después el local fue recuperado, este oficial de la Marina Mercante, en presencia de quien esto escribe, junto a los coroneles Bolentini y Zubia, ministro del Interior y jefe de policía del gobierno constitucional de Bordaberry, en presencia de un cartel de los

La consecuencia de la intervención en la Universidad fue la paralización de la actividad académica en las diez facultades y en las cuatro escuelas que componen la Universidad, y un gran deterioro del Hospital de Clínicas, el mayor y más prestigioso centro asistencial del país, que era operado por la Universidad a través de la Facultad de Medicina.

Todas las facultades, sin excepción, han quedado profundamente afectadas por la acción de la dictadura. Los cursos se dictan irregularmente, recurriendo a personal sin preparación académica; la investigación científica prácticamente ha desaparecido.

Una de las facultades en la que se hacía una mayor labor de investigación era la de Medicina. Reproducidos, a continuación, un extracto de un informe reciente de su cuerpo de profesores: "Desde el momento en que la intervención comienza a actuar en la Facultad de Medicina, este [sector investigación] es uno de los sectores más afectados [...] la investigación está muerta en la Facultad."

En la Facultad de Agronomía, de importancia singular para la economía del país (más del 90% de sus exportaciones son productos agropecuarios), se han paralizado las actividades de los tres campos experimentales de Paysandú (producción animal), Salto (producción granjera y citrícola) y Cerro Largo (forestal). De los ciento cincuenta docentes que tenía la Facultad, ciento treinta, es decir, el 87%, han renunciado o han sido destituidos.

En la Facultad de Ingeniería, doscientos cincuenta y nueve de los trescientos ochenta y nueve cargos docentes existentes, permanecían vacantes en julio de 1975. Es decir, un 67% de los profesores y docentes auxiliares que la facultad tenía, ha sido eliminado. Han desapa-

tantos que estilan colocar los estudiantes que decía: "Fuera los fascistas de la enseñanza", expresó espontáneamente, sin que nadie lo interrogara al respecto: "Esto se refiere a nosotros." No sólo son fascistas, sino que han alardeado de serlo.

recido, así, institutos enteros, como el de Matemática, el de Electrotécnica, el de Ingeniería Civil y el de Ingeniería Mecánica. El de Física ha perdido el grupo principal de sus profesores e investigadores, funciona en forma precaria con personal sin preparación académica. Ha sido eliminada la tarea de asistencia técnica, que ejercían los institutos en apoyo de la industria pública y privada desde fecha tan temprana como 1914.

En la Facultad de Ciencias Económicas, se destituyó a todo el personal, unas veinticinco personas que actuaban en el Instituto de Economía; este Instituto se orientaba al análisis de la realidad nacional, para lo que preparaba publicaciones sobre coyunturas económicas, proceso económico del Uruguay, estadísticas económicas, industria, agro, etcétera.

El Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho fue cerrado, y en la Facultad de Humanidades y Ciencias se expulsó al personal docente de los Institutos de Historia, Filosofía, Historia de las Ideas, Filosofía de la Historia, Literatura Uruguaya, etc. En tales condiciones, las ciencias humanas han sufrido un rudo golpe, y ha emigrado del país la mayoría de los profesores expulsados.

En la Facultad de Arquitectura, de doscientos cargos de enseñanza e investigación, noventa, es decir, el 45%, permanecían vacantes en julio de 1975, como consecuencia de expulsiones y renunciaciones. Se cerró el Servicio de Climatología Aplicada, único del país.

El más importante centro hospitalario, el Hospital de Clínicas, que poseía equipos únicos en las ramas médicas de tratamiento intensivo, neurología, riñón artificial, cardiología, se vio profundamente afectado por la expulsión de una parte significativa de su personal médico. El servicio se ha deteriorado, como puede verse en los siguientes índices: entre 1973 y 1974, la proporción de presupuesto dedicado a gastos de funcionamiento, disminuyó del 14% al 12%; el rubro destinado a alimentación de enfermos, se redujo en un 30%; el

número de fórmulas entregadas por el Departamento de Farmacia, disminuyó en un 20%, aunque la atención, que es gratuita, creció en un 25% como consecuencia de la grave crisis que la dictadura hace sopor- tar al país, en su vano intento por contener la inflación (67% en 1975).

Para reanudar el dictado de algunos cursos, se recurrió a profesores de enseñanza media, a profesiona- les desprovistos de preparación académica y a algunos profesores de ideología fascista retirados hacía varios años de toda actividad. En la Facultad de Agronomía se expiden títulos sin que se haya cursado el total de la carrera, lo que confiere un triste poder a su decano, y constituye un objetivo reconocimiento a la imposibi- lidad de sustituir a los profesores expulsados.

En la Facultad de Ingeniería, se ha implantado una norma por la cual se sanciona a los estudiantes si en clases hacen preguntas al profesor.

El siguiente episodio sirve para tipificar el régimen que gobierna la Universidad de Montevideo: el decano- interventor de la Facultad de Agronomía sostuvo que “había que suprimir la investigación porque incomo- daba a la enseñanza”. La consecuencia inmediata, fue que en el campo experimental de Paysandú, donde se criaba una majada de ovinos seleccionada después de cuidadosas experiencias genéticas realizadas durante más de quince años con el fin de obtener un alto grado de parición (más de un hijo por vez), no sólo se sus- pendieron las experiencias, sino que se entregó la ma- jada a los soldados de la tropa que ocupaba la Esta- ción, ¡quienes se la comieron!

LA UNIVERSIDAD, LA NACIONALIDAD Y LA POLÍTICA DE ENTREGA DE LA DICTADURA

Puede hablarse, sin temor a exagerar, de la elimina- ción de la Universidad por parte de la dictadura uru- guaya, en cuanto las funciones esenciales de una insti-

tución de enseñanza superior le han sido cercenadas o suprimidas.

La enseñanza superior, cuando no se conjuga con la investigación científica, transforma a los profesores en simples repetidores de textos y conocimientos que les son extraños, reduciendo el nivel de la institución al de una simple escuela secundaria, en la que el estudian- te, a lo sumo, se informa de conocimientos, pero no se forma en la búsqueda, por sí mismo, de soluciones ori- ginales a los problemas que le planteará su vida pro- fesional.

Suprimir en las facultades las ciencias humanas, co- mo la Historia, la Economía y la Sociología, a través de las cuales se vinculaban los estudios especializados con los problemas del hombre y con la problemática nacional, significa suprimir, en el estudiante, todo es- píritu crítico en relación con el país, en un intento de producir tecnócratas dispuestos a seguir ciegamente a la clase dominante, quien a través de la dictadura se ha apoderado de él: grandes banqueros, ganaderos, in- dustriales y gestores vinculados a las empresas multi- nacionales que colocan sus productos en el país.

Y si el estudiante no aprende a utilizar sus conoci- mientos para resolver con autonomía problemas nue- vos, si no adquiere capacidad para adaptar la tecnolo- gía a la realidad nacional, es porque no ha pasado por una universidad, aun cuando la institución que le ha expedido el título lleve ese nombre.

Esta política que la dictadura aplica en la Univer- sidad no está aislada de la que aplica en el resto del país: ella es coherente con la tendencia que orienta los planos del ministro de Economía y Finanzas de la dic- tadura, planes que, según decía *Informaciones Uru- guayas* en enero de 1976, le han puesto al país “ban- dera de remate”: “Las empresas extranjeras penetran raudamente en el país al amparo de la Ley de Inver- siones Extranjeras de signo crudamente entreguista, ya

que les otorga plena garantía para repatriar el capital invertido y todas las ganancias, en dólares.”³

Vegh Villegas dijo que “la legislación debe ser ciega y neutra frente al capital extranjero, no realizando frente a él, distinción alguna respecto al capital doméstico”.

Esta política de desenfrenado liberalismo económico que el ministro llama de “apertura”, ha desembocado en que amplios sectores de la actividad industrial, agrícola, y de los servicios, en manos de empresarios nacionales o del Estado hasta la dictadura de 1973, hayan pasado a manos extranjeras. Importantes industrias en el campo textil, vidrio, metalmecánica y reparación de buques, así como los servicios de transportes públicos de la capital, del cultivo de soya en la agricultura, de la comercialización de productos de petróleo y cemento del campo estatal, han sido vendidas a capitalistas extranjeros (Estados Unidos, Grecia, Japón), o entregadas a cooperativas de trabajadores (transporte capitalino) que, desprovistas de todo apoyo crediticio por parte del Estado, caerán en manos del capital financiero internacional como ya sucedió, en 1958, con el Frigorífico El Cerro.

La dictadura, para salir de la crisis que comenzó a mediados de los años cincuenta para culminar unos veinte años después con el golpe de Estado fascista de 1973, propone una alternativa capitalista que “supone avanzar hacia el no Uruguay, hacia el no país, hacia un Uruguay sin nacionalidad”.⁴ Y en este “no Uruguay”, “no país”, en este Uruguay “sin nacionalidad”, la Universidad de la República tenía que ser víctima predilecta, porque, como decía el cintillo que ocupaba toda la primera página de un número de *Marcha* —publicado cuando la crisis social y política arreciaba en-

³ “Balance crítico de la economía uruguaya en 1975”, *Informaciones Uruguayas*, n. 9, enero de 1976.

⁴ Irisity: “Uruguay, el fracaso de la opción neoliberal”, *Nueva Sociedad*, n. 21, San José, Costa Rica, noviembre-diciembre de 1975.

tre 1968 y 1972, y las amenazas se acumulaban contra la Universidad que defendía las conquistas sociales, culturales y populares que dieron renombre al Uruguay que sucumbió en 1973— la *Universidad es el país*.

A este respecto la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, opinó: “En sus ciento cincuenta años de vida, la República Oriental del Uruguay ha conocido, desde su fundación en 1849, una Universidad sensible y participante en el proceso histórico, comprometida con los valores humanistas, atenta a las necesidades de su desarrollo económico y a la lucha permanente de los trabajadores por mejores condiciones de vida.”⁵

En otras palabras —más explícitamente, menos periodísticamente—, la FEUU reitera los mismos conceptos de Quijano: el Uruguay de los valores humanísticos, el Uruguay de la democracia y las libertades públicas, el Uruguay refugio de los políticos democráticos perseguidos por las dictaduras militares que en las distintas épocas asolaron a los otros pueblos de Latinoamérica; el Uruguay culto, poseedor de la más baja tasa de analfabetismo de todas las repúblicas latinoamericanas; el Uruguay del subdesarrollo diferente al de las otras naciones subdesarrolladas; está totalmente identificado con esta Universidad que, desde que naciera a mediados del siglo XIX sobre la base de un grupo de intelectuales argentinos perseguidos por la tiranía de Rosas que se encontraban exiliados en Montevideo, mantuvo, hasta que el zarpazo fascista la destruye, su identificación con los principios más rescatables de una nación que, por razones políticas y de geografía, estaba condicionada a desarrollarse, en el siglo que va de 1850 a 1950, dentro de un esquema capitalista, altamente dependiente de los grandes centros de desarrollo industrial y financiero internaciona-

⁵ Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay: “La situación de la enseñanza superior en el Uruguay”, EULA II, febrero de 1976.

les. Sin embargo, dentro de ese esquema, el Uruguay produjo una experiencia singular, que comienza en el último cuarto del siglo pasado con la modernización de la explotación ganadera y la de las instituciones del estado liberal que piensa en la educación masiva de sus hijos, en la salud pública y en la industrialización. En esa época se sientan las bases del sistema de educación primaria (José Pedro Varela, 1876) que regirá durante un siglo en el país, y la Universidad, durante el rectorado de Alfredo Vázquez Acevedo, diez años después, realiza su reforma orgánica que la transforma, bajo el signo filosófico del positivismo, en la universidad moderna que produjo la clase intelectual que, íntimamente asociada al capital nacional e internacional, sentó no obstante, las bases de un país con una creciente participación del Estado en el producto bruto, en las actividades industriales y de servicios de interés público, y que hizo posible una distribución de la riqueza entre el trabajo y el capital más equitativa que la que se daba, en esa época, en las repúblicas hermanas del Continente.

Cuando esa experiencia hace crisis en la década del cincuenta de este siglo, la Universidad está plenamente consciente de que el modelo se ha agotado y, de modo concomitante con el despertar de esa conciencia universitaria que reclama un mayor pensamiento crítico sobre la realidad nacional, en 1958 se produce una nueva reforma conceptual de la Universidad, que tiende a adecuar la institución de 1885, pensada para un país en eufórico crecimiento, a los reclamos de un país en crisis, profundamente afectado por todos los problemas políticos, sociales y económicos que trajo al mundo la posguerra de la segunda contienda mundial.

Esta crisis marca el divorcio definitivo de la Universidad con las fuerzas que, asentadas en el poder económico, gobiernan al país. Mientras la Universidad propicia cambios radicales en la economía nacional y promueve intensamente la investigación científica y la

mayor dedicación de los profesores a la tarea universitaria como un medio de formar una generación de hombres capaces de pensar y resolver autónoma y creativamente los problemas del país, las clases dominantes, repartidas ahora sin mayores diferencias entre los dos partidos tradicionales se aferran a un modelo que ya ha dado todo lo que de él se podía esperar.

La producción agropecuaria se desarrolló, en manos de capitales criollos o de extranjeros radicados en el país, al impulso del proceso renovador que transcurre a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, consistente en la sustitución del animal criollo por razas importadas, cuyas carne y lana tienen gran aceptación en los mercados externos, fundamentalmente en los ingleses, y a consecuencia de la implantación, en manos de intereses multinacionales, de la industria frigorífica.

La pacificación del país a principios del siglo XX, posibilita la explotación capitalista de la estancia criolla y la comercialización de su producción, con sólidas bases empresariales. La tecnología que se aplica es importada, pero se adapta a las condiciones de clima, extensión territorial y población disponible, las cuales hacen posible una explotación extensiva del campo que deja grandes beneficios al productor nacional y al industrial y comercializador extranjero, pero que, pasado el impulso inicial, se estanca en un *óptimo* de un vacuno y dos ovinos por hectárea dedicada a la producción animal. Esta riqueza permite desarrollar una sociedad próspera, mientras la población se mantiene por debajo del millón y medio de habitantes. Instrumenta esta sociedad un estadista de genio, de visión y de carisma popular, José Batlle y Ordóñez, quien a partir de 1904 sienta las bases de una política de conciliación del trabajo y del capital, con amplia participación del Estado como factor de redistribución de riqueza, con planes de seguridad social avanzados, con una proyección masiva de la educación primaria y secundaria, y el monopolio para el Estado de actividades

de interés público como la electricidad, el petróleo (refinación), el alcohol y los seguros, y que se extiende, ya al fin de la vida útil del modelo, a los servicios públicos de agua y a los transportes marítimos, terrestres y aéreos, pero que dejó intacta la explotación privada de la tierra, de la industria manufacturera (textil, frigorífica, alimentos, metalmecánica, naval, etc.) y la actividad financiera (bancos de ahorro y crédito).

Por una visión miope de la clase empresarial que explotó el campo uruguayo, hasta 1939 vinculada al Partido Nacional (Blanco), pero que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial se extiende a los principales dirigentes del rival Partido Colorado, donde el batllismo fue perdiendo paulatinamente la característica agresiva de partido progresista de avanzada que tuvo durante la vida de su fundador (fallecido en 1929), no se estimula un proceso de mejoramiento de la tecnología con la que se explota el campo. Las reservas ganaderas se estancan; en 1970, las existencias de vacunos y ovinos, si cualitativamente muy distintos a los de un siglo atrás, en número de cabezas no difieren de las que reporta José Pedro Varela en su *Legislación escolar* en la misma década del siglo pasado. El campo no obtuvo los beneficios que hubiera podido cosechar con la fundación de las Facultades de Agronomía y Veterinaria, de las Escuelas Experimentales de Paysandú, Salto y Cerro Largo —pasadas a la Universidad a poco de su fundación— y de la Estación Experimental La Estanzuela, de Colonia, del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Una clase empresarial conservadora no sólo en sus convicciones políticas, sino también en su hábitos comerciales, industriales y de inversión, que rehuye el riesgo de la experimentación y la innovación, escudada en la facilidad de la apropiación de más y más hectáreas que sólo se subdividen en manos de varios propietarios por el proceso de la herencia; jamás promueve, como se hizo, por ejemplo,

en Australia y Nueva Zelanda, la investigación científica aplicada a los problemas de la producción animal y vegetal. Ello no sólo provoca el estancamiento de la principal riqueza renovable en que se asienta la economía del país, sino que también se sumerge en la crisis por dificultad de la colocación de la zafra de lana, por falta de conocimiento del tipo de lana que se debe producir, por la competencia de las fibras artificiales y por la dependencia tecnológica total que impide hallar nuevas salidas industriales al producto. La tecnificación del agro en este siglo, no se extiende más allá de una mecanización que no siempre tiende a un aumento de la productividad de la tierra, sino que sólo busca reducir costos y sustituir mano de obra, al uso incipiente de algunos fertilizantes, y a la práctica de la rotación de los cultivos. Y cuando la población excede en un millón a la que podía vivir de manera próspera al amparo de lo que el agro producía, lo que acontece a mediados de este siglo, la crisis se desencadena. Esta crisis, objetivamente insuperable dentro del esquema tradicional, con el campo concentrado en pocas manos de empresarios reacios a todo tipo de modificación del patrón de producción, es la que a la larga va a provocar, después de veinte años de marchas y contramarchas políticas, la crisis total que desemboca en el golpe de Estado de junio de 1973. El Estado de las libertades públicas, con un 25% del presupuesto nacional dedicado a la educación, con un esquema de seguridad social que incide en los costos de producción como un factor que se debe remunerar igual que el salario directo, que ha provocado el desarrollo de una clase obrera organizada en la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y consciente de sus conquistas y su derecho a defenderlas; un Estado con una clase intelectual proletarizada por el acceso masivo de los sectores medios a la educación, que ha analizado la crisis uruguaya y ha propuesto soluciones de distribución equitativa, ya no sirve a los ganade-

ros, banqueros e industriales, quienes sienten amenazada su participación a la fracción para ellos irrenunciable del valor agregado de la producción nacional, y que no se animan, por su falta de dimensión empresarial, a encarar cambios que significan riesgo. Baste decir, en apoyo de esta afirmación, que el Uruguay pudo haber financiado todo su desarrollo hasta 1970, sin recurrir al endeudamiento externo que enajenó definitivamente su independencia política. La deuda externa pública y privada del país, en esa fecha, era de ochocientos millones de dólares, cifra igual a la de las inversiones fuera de fronteras, de origen uruguayo. Mientras que el excedente de capital producido por el trabajo uruguayo se invertía en empresas multinacionales extranjeras porque ofrecían más seguridad, el trabajador uruguayo debía destinar parte de su trabajo a pagar los intereses y la amortización del capital que se pedía en préstamo al exterior para sustituir, en la economía interna, el ahorro que se quitaba a las inversiones imprescindibles.

La Universidad, con sus cátedras e Institutos de Ciencias Sociales, Económicas e Históricas, ha desempeñado un papel protagónico en descubrir una realidad que molestaba. Al sugerir soluciones de justicia social a través de cambios estructurales concretos, resulta el centro al que se dirigen todos los ataques de la clase que domina al país en forma cada vez más cerrada y con sentido de exclusivismo clasista. Este sector minoritario proclama a la Universidad santuario de subversión,⁶ y a los universitarios marxistas-leninistas, y desata la guerra económica contra ella en un intento de desalentar la dedicación a la carrera universitaria, y de impedir que se siguiera realizando una investigación científica que no necesitaba para el desarrollo de sus empresas, las cuales obtenían la tecnología que requerían en el mercado internacional, y que cuando se

⁶ Expresión del ministro del Interior de 1968, Eduardo Jiménez de Aréchaga.

realiza en los temas candentes de la sociedad uruguaya tendía a poner en evidencia el origen de una crisis cuya solución, con sentido social, se oponía a sus ambiciones desmedidas de beneficios que ningún país capitalista del mundo, puede obtener con su ineptitud gerencial, su tendencia al consumo dispendioso que entorpece las inversiones reproductivas, su horror al riesgo, en una palabra, la falta de condiciones del empresario capitalista que creyó ser.

Todo lo contrario de un "santuario de subversión": la Universidad siempre reclamó el respeto de su autonomía porque era un "santuario de libertad" en el que, en forma irrenunciable, se defendían las conquistas sociales y las libertades públicas cuyo mantenimiento se oponía al nuevo esquema social de quienes gobiernan en el país a partir de noviembre de 1967. Si algo se conservó intacto en la Universidad posterior a 1958, fue el apego irrestricto al liberalismo cultural, que distinguió a la Universidad desde su fundación. ¿Fue un error? Tal vez lo razonáramos, pero no lo sentíamos, y por eso, hasta su caída, en la Universidad de la República se ejerció, en forma total, un pluralismo ideológico que sólo había de erradicarse cuando la intervención de 1973 originó una persecución ideológica en la que cientos de universitarios, de todas las tendencias políticas, de todos los credos filosóficos y religiosos, fueron perseguidos, expulsados, encarcelados y torturados, por no sentirse sometibles a los dictados de la tiranía.

Las elecciones universitarias de septiembre de 1973, realizadas noventa días después de la clausura del Parlamento, con serias trabas para el libre ejercicio de una campaña electoral que necesitaba proyectarse fuera de la Universidad, porque en ella votaban todos los titulados de las distintas facultades, fueron una rotunda confirmación de este divorcio entre los universitarios y quienes dominaban el país. Sólo un 2.26% de

los casi cuarenta mil votantes, entre profesores, egresados y estudiantes, votó la lista productorial.

La Universidad fue, insistimos, durante toda su existencia, campo de cultivo para todas las ideologías. Toda la legislación universitaria, particularmente los reglamentos para ingreso y ascenso a la docencia y a los cargos administrativos, estaba pensada dentro de esta filosofía, y ellos se aplicaron de modo estricto. De allí resultó que un vasto espectro ideológico caracterizara el pensamiento político del profesorado universitario, con incursiones en la izquierda, en el centro y en la derecha políticas, nacional e internacional. Respecto al estudiantado, en la medida en que era la única Universidad del país, cabe consignar que a ella ingresaban los hijos de todos los sectores de la población que, por sus ingresos, tenían acceso a la enseñanza superior. La enseñanza universitaria era gratuita, es decir, no se pagaba matrícula, y todo el que terminara el ciclo secundario tenía acceso a ella, sin cupos de especie alguna. Sólo hubo un factor discriminatorio: habían en el país un amplio sector de la juventud uruguaya que no terminaba los estudios primarios, fundamentalmente por los bajos ingresos de la propia organización social del país; y otro, especialmente del campesinado, que por estar radicado en zonas alejadas de Montevideo, no podía pagar el elevado costo de educar a sus hijos hasta los veintiséis o veintisiete años, no sólo por lo que cuesta vivir fuera del núcleo familiar, sino también por el hecho de dilatar en seis u ocho años su ingreso al ciclo productivo. El sistema de becas que comenzó a funcionar a mediados de los años sesenta era escaso en recursos y de funcionamiento defectuoso; pero aun cuando hubiera sido efectivo, nunca habría resuelto el problema de un sector importante de la juventud que no termina las etapas previas a la educación universitaria.

Si se excluye este factor, que no deriva de causas imputables a ella, tenían libre acceso a la Universi-

dad, todos los sectores sociales y todas las ideologías, pues el único requisito de ingreso era el "pase" de la enseñanza secundaria. No existía posibilidad alguna de realizar una selección de ningún tipo sobre los jóvenes que otros institutos habilitaba para estudiar en la Universidad.

Se infiere de estos hechos que si la Universidad, a partir de la posguerra, se comenzó a separar de su clásica alianza con los sectores dominantes, lo hizo como consecuencia de un proceso natural, al que se llegó al someter a crítica la propia realidad que vivía el país. No fue despreciable en la consolidación de esta evolución la influencia renovadora de una juventud inquieta, progresista, gremialmente bien organizada (FEUU), que no era insensible, a pesar de su origen social proveniente sobre todo de la clase media alta, a las dificultades que padecía el país, que no se contentaba con respuestas superficiales a las interrogantes económicas, sociales y políticas del país, y que felizmente nunca aceptó el principio de autoridad del *magister dixit*. Símbolos de esta juventud universitaria democrática, valiente e inconforme, son dos universitarios asesinados por fuerzas policiales en épocas muy distintas: Francisco Lavadeira, en 1875, y Líber Arce, en 1968. El primero fue asesinado por los esbirros de Latorre,⁷ en los prolegómenos de su ascenso al poder dictatorial; el segundo, por los esbirros de quienes prepararon el acceso de la actual dictadura, reivindicadora histórica de la de Latorre.

La Universidad, por su mismo apego a las tradiciones del pensamiento liberal, no recibió con entusiasmo la decisión parlamentaria de 1958, que ponía entre sus fines "la defensa del sistema democrático republicano de gobierno", no porque tuviera preferencia por otro

⁷ En 1975 se repatriaron sus restos, hasta la fecha perdidos en algún cementerio de Buenos Aires, y su nombre se puso a una calle céntrica de Montevideo.

sistema, sino por la simple razón de que así se consagraba como un dogma político.

Sin embargo, cuando el régimen democrático republicano de gobierno no sirvió más al sistema económico que ejercía el poder político del país, y se comenzaron a violar los preceptos constitucionales, las libertades públicas y sindicales, la autonomía del Poder Judicial y del sistema educacional, hasta terminar en la disolución inconstitucional del Parlamento y la instauración de un estado de terror gobernado por una dictadura sangrienta de torturadores, la Universidad, con unidad monolítica, defendió el régimen democrático republicano, y en su defensa sucumbió. La violación de los preceptos constitucionales comienza de manera tímida en la segunda mitad de la década de los años cincuenta; pero es a partir de 1967 cuando se actúa desembozadamente hasta culminar con el zarpazo de los militares sublevados en 1973. En todo ese lapso, le correspondió a la Universidad protagonizar un papel de defensora del sistema legal consagrado en el país y de las libertades emergentes; por ello fue atacada despiadadamente por los personeros del *status quo* que terminarían quebrando el sistema institucional vigente, y que eran los mismos que, en 1958, agregaron en el Parlamento, en el texto de la Ley Orgánica de la Universidad, el artículo 3, referido a la defensa del sistema democrático republicano.

En este análisis en que hemos resumido las razones sociales, políticas y económicas que terminaron con el Uruguay democrático y con la Universidad que estuvo íntimamente asociada al proceso de la consolidación del país como nación moderna, hemos centrado el peso de la responsabilidad en la clase de los ganaderos, no porque el mundo de las finanzas o el sector industrial no tengan su cuota de responsabilidad en la crisis que desemboca en la dictadura, sino fundamentalmente, porque, a partir de la época en que hicimos el análisis, estos tres sectores de la vida económica del país,

se encuentran totalmente interconectados, a diferencia de lo que sucedió antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando los mundos del agro y de la industria tenían pocos puntos de contacto, y en la lucha por el poder se manifestaban en el Partido Nacional, los primeros, y en el Colorado, los segundos. En este último era mayoría el batllismo, fuerza política que agrupaba a la clase media urbana que creció al impulso de la modernización del país. Digamos sólo, para no extendernos excesivamente en este análisis, que la inclusión del sector industrial alteraría poco el modelo descrito y las conclusiones a que hemos llegado.

El empresario industrial no era más dinámico que el del campo. Padece del mismo conservadurismo que hemos descrito como característico de estos últimos, reacio a la innovación y al riesgo, que son las fuerzas dinámicas fundamentales del sistema capitalista que creía integrar. Vivieron de las inversiones fáciles en industrias de tecnología importada, sin ningún intento de adaptación, al amparo de los beneficios que se procuraban con la protección aduanera, y con una legislación que les garantizaba dividendos elevados, sin competencia y sin ningún control de calidad.

Si ambos sectores, representado uno por la Asociación y la Federación Rurales y el otro por la Cámara de Industria, chocaron a lo largo de los años, fue porque, en la época de la industrialización del país, la legislación de inspiración batllista promovió la actividad industrial, subsidiando el petróleo y la energía que ella consumía con parte del producto agropecuario; y, cuando comienza la crisis de posguerra, porque el proceso inflacionario que favorecía el agro con créditos en moneda nacional arruinaba a la industria que operaba con créditos en moneda fuerte, cuya valorización superaba el ritmo del aumento de los precios internos de las manufacturas. Las industrias uruguayas de los últimos veinticinco años eran, más que fábricas y talleres, verdaderos museos de tecnología, con maqui-

naría obsoleta en la mayoría de las factorías textiles, en las productoras de alimentos y bebidas, en los talleres metalmecánicos o en la industria naval. Al igual que en el sector agrícola, poco se favoreció a la industria con las facilidades que le brindaba la Facultad de Ingeniería. La mayoría de los ingenieros y de los importantes laboratorios de que esta Facultad disponía trabajaron, preferentemente, para los servicios públicos que estaban en manos del Estado. Cuando el golpe de Estado se produce, la industria es la que fundamentalmente apoya a la dictadura, pues ambiciona una estabilidad monetaria que sólo se podía conseguir a expensas de una disminución brutal del poder adquisitivo del trabajador, y de las ventajas que el agro obtenía con las devaluaciones anuales hechas para favorecer la colocación de la zafra de lana. La ley de inversiones extranjeras que promueve la dictadura, les permite desprenderse de una industria que ya sólo tiene el valor de la organización de venta en el reducido mercado interno, proporcionándoles capitales que podían utilizar en inversiones externas o en el campo, al que la mayoría de ellos se había volcado en los últimos veinticinco años.

Éste es el verdadero sentido de la frase de *Informaciones Uruguayas*, cuando dice que “al país le han puestto bandera de remate”.

La clase industrial, apoyando la política de “apertura” de la dictadura, se salva no como tal, sino al nivel de su individuos; pero la actividad que estos realizaban con incompetencia proverbial, será traspasada a capitales extranjeros, que con capacidad empresarial y apoyo tecnológico, seguirán produciendo, con beneficio, lo que ellos producían ocasionando la ruina del país. El subdesarrollo no es otra cosa que trabajar sin acumular el capital que el crecimiento autónomo exige que se genere e invierta en el país. Ahora, aunque se genere, servirá, como en la mejor época de la colonia, para engrosar las inversiones de los países centrales,

a través de los dividendos y *royalties* cuya exportación la ley de inversiones extranjeras garantiza al inversionista foráneo, porque “la legislación debe ser ciega y neutra frente al capital extranjero”, y porque ahora sí como expresa el plan de desarrollo instrumentado por la dictadura, “la tecnología que el país necesite para su desarrollo, será adquirida en el extranjero”. Ahora la Universidad no es necesaria, salvo para producir médicos y abogados que cuiden la salud y los intereses del reducido núcleo que usufructúa, integralmente, los dieciséis millones de hectáreas cultivables del país.

EL FACTOR INTERNACIONAL

Si se desea tener una visión completa sobre lo que en el país ha sucedido, es necesario considerar aspectos que escapan al simple análisis interno de la crisis económica y política que condujo al Uruguay al golpe de Estado de 1973 tres meses antes del derrocamiento y muerte de Allende en Chile, y que tienen que ver con problemas de política internacional. Un hecho objetivo, que es del dominio público y que ha sido comentado editorialmente por el diario conservador argentino *La Nación* en mayo de 1975, es el de la ingerencia que el embajador de los Estados Unidos ejerce en los asuntos políticos del Uruguay, a partir del golpe de Estado en junio de 1973. Los funcionarios de la Embajada expresan a quien pregunte sobre el particular, que el gobierno uruguayo emanado del golpe de 1973 cuenta con el total apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Dentro del esquema golpista de neto corte fascista, el embajador norteamericano apoya al sector civil que representa Bordaberry, como consecuencia de su desconfianza hacia los militares, desconfianza no borrada, aparentemente, por los hechos posteriores, debido al tinte “nacional-peruanista” de los comunicados 4 y 7 que las Fuerzas Armadas emitieron en febrero de 1973, en el pronunciamiento previo a la disolución del Parlamento.

El apoyo no es una decisión forzada por una coyuntura imprevista. Esto se deduce al analizar la exposición que Thomas Farer, asistente especial del Subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, hizo en el Coloquio sobre el futuro de las relaciones entre la América Latina y los Estados Unidos, y que se realizó en Oaxtepec, México, en noviembre de 1975. Farer expresó que la misión del Departamento de Estado es la de formar un gran imperio, y estructurar una política internacional que preserve la Seguridad de los Estados Unidos y salvaguarde los intereses de sus ciudadanos en el exterior; que al terminar la Segunda Guerra Mundial se vio como grupos radicales de los países latinoamericanos tendían a vincularse con la Unión Soviética, lo que afectaba la seguridad de los Estados Unidos, y que muchos de esos grupos proclamaban la necesidad de nacionalizar bancos y empresas que eran propiedad de ciudadanos norteamericanos, lo cual se había visto confirmado con el triunfo de la Revolución Cubana; que en el Departamento de Estado se había llegado a la conclusión de que el contrarrestar el posible éxito de los grupos radicales, se obtendría a través del desarrollo de la América Latina, pero que esa tarea llevaría de diez a quince años.⁸ En el ínterin, la única manera de impedir el éxito "de los grupos radicales" era armar a los ejércitos. Ejemplificó con los casos de Brasil, Santo Domingo y Chile, y agregó que en 1973 había terminado un ciclo de la política de los Estados Unidos en la América Latina y, dirigiéndose ostensiblemente a la amplia audiencia norteamericana que en la sala había criticado la política internacional del Departamento de Estado, expresó que ella había tenido éxito en formar un gran imperio, y que estaban abiertos al cambio, siempre que se garantizara alcanzar el mismo objetivo.

⁸ Esta fue la filosofía explícita de la Alianza para el Progreso y de la reunión de presidentes de la América Latina realizada en Punta del Este, Uruguay, en abril de 1967.

Farer no mencionó en su disertación el caso uruguayo, pero que el Uruguay cae dentro del esquema expuesto por él lo prueba no sólo la proximidad en el tiempo del golpe uruguayo con el chileno, sino también el hecho de que en las elecciones de 1971, en Uruguay se formara una coalición de partidos antimperialistas, el Frente Amplio, que no sólo incluía al Partido Comunista junto con el Socialista, a la democracia cristiana, a los batllistas disidentes y a los independientes, sino que también, en sus medidas de gobierno, propiciaba pasar al ámbito del Estado a importantes sectores financieros, comerciales e industriales, en los que empresas y bancos norteamericanos tenían importantes intereses.

El Frente Amplio representaba, dentro de la política uruguaya, la primera alternativa seria al tradicional bipartidismo de colorados y blancos, que a través de las épocas se repartieron el poder político de la República. Esta alternativa alarmó al gobierno norteamericano, afectó a los esquemas bipartidistas de fácil control, lo que en el fondo significan alternativas de poder para una misma política. Es, por otro lado, la salida política a la dictadura que la Embajada norteamericana propició siempre en Brasil, el caso que más utilizó Farer para ilustrar la exposición.

Como en noviembre de 1976 deberían realizarse elecciones generales en Uruguay, la dictadura se encuentra en una encrucijada. El ministro de Economía y Finanzas, que es en la dictadura el principal vocero de la Embajada norteamericana, cosa que él acostumbra proclamar en sus frecuentes viajes a Buenos Aires, como su "factor de poder", defiende la vigencia de los partidos políticos, aunque sea contraria a la posición del dictador y de los militares. Sostiene que "aunque se parecen mucho", ello es una ventaja, pues demuestra no otra cosa sino que, a diferencia de lo que acontecía cuando los partidos nacieron y se consolidaron en el poder (1830-1930), hoy representan

los mismos intereses económicos de la banca, la industria y el agro, íntimamente vinculados a los del imperio norteamericano.

No es, en consecuencia, difícil deducir que los Estados Unidos tuvieron en el proceso de destrucción de la democracia uruguaya la misma ingerencia que Farer proclamó para los casos de Brasil, Santo Domingo y Chile.

Si para algo sirvió el Coloquio de Oaxtepec, fue para poner en evidencia que, a diferencia de lo que proclamaban algunos trabajos que allí se leyeron, los Estados Unidos tienen una política bien definida para la América Latina: procurar un desarrollo a largo plazo, para disminuir las tensiones sociales internas que pueden afectar su dominio del Continente, porque ello aumentará el comercio con los Estados Unidos; y otro a corto plazo para instaurar dictaduras militares que desalienten cualquier apertura política progresista en las repúblicas latinoamericanas.

La política es concreta, y nunca dejó de ser coherente. Tiene, también, su manifestación cultural: la penetración cultural norteamericana en las repúblicas latinoamericanas, de más larga tradición en la zona del Caribe, no ha dejado de presionar en las repúblicas del Sur, particularmente en el Uruguay, en los últimos quince años. Manifestaciones visibles de ella son el desplazamiento del tango por la música *pop* en la juventud rioplatense (el fenómeno se observa igualmente en la Argentina), la afección de la juventud por la violencia, que se adquiere desde pequeño con los filmes, los seriales de televisión y los *comics* de aventuras de origen norteamericano, el desplazamiento del francés por el inglés como segunda lengua, el cigarrillo rubio en vez del tabaco negro y la introducción de la Coca-Cola como sustituto del vino tinto y el mate. Esta penetración también se dio al nivel universitario, a través de planes de investigación científica que financiaban organismos norteamericanos en laboratorios

nacionales, la invasión de textos de baja calidad, traducidos del inglés al castellano bajo el signo de la Alianza para el Progreso; los Cuerpos de Paz que operaban en las colectividades campesinas y en las actividades deportivas; la educación de oficiales de las Fuerzas Armadas en las academias norteamericanas de la zona del Canal de Panamá; etcétera.

El desarrollo de las naciones latinoamericanas, al que los Estados Unidos no se opone "porque aumentará el comercio de los Estados Unidos", tal como esa nación lo concibe, se realizaría dentro de un marco de total dependencia tecnológica y financiera, a través de inversiones de las empresas multinacionales norteamericanas, como acertadamente y con precisión y sagacidad lo ha analizado Celso Furtado.

Por consiguiente, no interesa en esos países desarrollar capacidad propia ni en investigación ni en desarrollo; los personeros de la política norteamericana (BID, OEA, por ejemplo), procuran transformar las universidades latinoamericanas en instituciones donde se cursen carreras cortas, que preparen gente con habilidad para desempeñarse en posiciones subalternas dentro de las empresas multinacionales.

Un agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos nos trataba de convencer de que era poco razonable desarrollar la Ingeniería en el Uruguay: "Eso lo hacemos nosotros [los norteamericanos]; ustedes [los uruguayos] deben ocuparse de la carne, el trigo, las patatas y las naranjas", es decir, tener una buena Facultad de Agronomía y no destinar recursos a cosas que en el Norte se hacen mejor.

En 1958 se presentó a la Facultad de Ingeniería, que desde 1914 poseía laboratorios importantes de asesoramiento a la industria nacional, un proyecto prohiado por figuras que actualmente son importantes en la Universidad intervenida, para transformar los laboratorios en satélites para realizar ensayos de rutina de la Armour Research Foundation de los Estados Unidos. La

que instalaría una filial en Montevideo. La decidida oposición de un grupo de ingenieros de la Facultad, que encabezaba el profesor Julio Ricaldoni, luego decano de la Facultad en el momento del golpe, evitó que la iniciativa se concretara. Producida la intervención, el profesor Ricaldoni fue encarcelado por un periodo de dos años, sin que hasta hoy se sepa oficialmente por qué; mientras tanto, los antiguos gestores a sueldo de la Armour vuelven a dicha Facultad para desenterrar el proyecto, como lo declarara a la prensa uruguaya, en 1975, el interventor de la misma.

Que la ciencia, la cultura y la tecnología no estaban fuera de los planes de "desarrollo dependiente" respecto de los Estados Unidos, lo prueba el hecho de que el tema ocupó un espacio no despreciable de la declaración de presidentes en Punta del Este, donde se planificó ese desarrollo. Ello era necesario para poder disponer de mentes disciplinadas y sometidas, sin espíritu crítico, para llegado el momento, sustituir a los dictadores militares con civiles debidamente adoctrinados.

Esta sustitución es imprescindible para la política norteamericana, pues como Farer también se encargó de explicarlo, sostener a las dictaduras militares representa, para los Estados Unidos, un "alto precio político", y no puede prolongarse mucho tiempo, pues ya comienza a notarse resistencia en el votante norteamericano.

Por ello, dentro de la OEA se creó el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC), cuya primera reunión se realizó en Washington en 1970 y convocó a la Conferencia Especializada para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de la América Latina (CACTAL) en Brasilia, en mayo de 1972. Desde su creación, el CIECC, con muy poco espíritu original, ha intentado emular a la UNESCO y sustituirla en la América Latina.

Diversos planes ha estructurado este organismo, que

en lo cultural trata de someter el Continente a las directivas norteamericanas sobre enseñanza de la ciencia y transferencia de tecnología mediante la reunión de congresos, la estructuración de programas sobre temas científicos y tecnológicos, el envío de expertos y la concesión de becas.

La Universidad uruguaya estuvo siempre muy reuente a participar en esos planes después de la experiencia realizada con el Centro para la Enseñanza de las Ciencias de la OEA, que funcionó en un local que cedió la Facultad de Ingeniería de Montevideo. La absoluta falta de nivel científico de la enseñanza que allí se impartía a estudiantes que venían de toda la América Latina, a quienes expedían certificados de estudios que servirían para engrosar su currículum, pero que procuraban consolidar el atraso proverbial de nuestros pueblos en el campo de la ciencia, llevó a la Universidad a solicitar de ese Centro el retiro de sus locales.

Una actitud similar tuvo la Universidad con la financiación que proporcionaba el BID. En 1967, un informe del abogado de la Universidad, profesor Alberto Pérez Pérez, sobre los modelos de contrato que ofrecía ese Banco, llevó a que la Universidad desechara utilizar tal fondo de financiación, pues las condiciones que los préstamos imponían no fueron consideradas compatibles con la Constitución y con las leyes vigentes.

La Universidad, en su proceso de alejamiento de los sectores dominantes del país que hemos visto en el capítulo anterior, consolidó una clara conciencia antimperialista, mientras que el análisis crítico de la realidad uruguaya desembocaba, inexorablemente, en una vinculación inseparable de la crisis con los factores económicos que ataran al país a distintos imperios —España, Inglaterra, Estados Unidos— desde la conquista hasta nuestros días. En el caso uruguayo, la dilucidación de esta estrecha conexión entre subdesarrollo e imperialismo se procesa, fundamentalmente, a través de los estudios históricos y económicos que un

grupo de investigadores, empeñado en someter a revisión la historia clásica del Uruguay, realizó en los últimos veinticinco años. La Universidad no fue el único centro donde se realizaron esos estudios, lo que muestra que el proceso de conciencia de los intelectuales uruguayos respecto a la realidad del país no era fruto de una postura política dirigida desde la Universidad, sino fruto de un proceso más amplio, que se gestó como consecuencia de la aplicación de criterios objetivos para el análisis de la realidad del país a lo largo de su historia, y de la proyección de ese análisis a la previsión de la conducta que se debía seguir en el futuro. Fue fundamental, para estructurar esta conciencia antimperialista, el análisis que se hizo de la aplicación en el país, a lo largo de las épocas, de pautas de liberalismo económico que llevaron a establecer, de manera sólida, una dependencia política total respecto de los países centrales. Y convergió en esta dirección, por la estrecha relación que la historia uruguaya ha tenido con la argentina, el análisis similar que un grupo de investigadores de aquel país efectuó de la historia argentina, a través del cual se llegó a las mismas conclusiones que en Uruguay.⁹ Es evidente que no todo el proceso de revisión histórica posee el mismo grado de objetividad con el que se llegó a mostrar el papel de la ideología liberal-económica en la dependencia de los países del Plata. Las ideologías se mezclaron, como inevitablemente se produce en las ciencias humanas, con el análisis científico, ejemplo de lo cual es la reivindicación que la dictadura uruguaya quiere hacer del dictador Lorenzo Latorre, o la que en Argentina se procura hacer de Rosas. Pero es incuestionable que el proceso revisionista tuvo no sólo un efecto muy claro en la formación de la conciencia antimperialista de los intelectuales rioplatenses (así debemos hablar, pues

⁹ Un sector de los nacionalistas argentinos que impulsó el revisionismo histórico argentino, militó en la extrema derecha política, y su anti-liberalismo los llevó a asumir posturas netamente fascistas. Este fenómeno se dio menos ostensiblemente en el Uruguay.

el fenómeno se produjo paralelamente en ambas márgenes del Plata), sino que también ayudó, en forma muy clara, a crear un sentido crítico respecto de la realidad nacional, aunque no fuera más que por el contraste que presentaban dos versiones —la clásica y la revisionista— de una misma realidad histórica.

La política norteamericana de fascistizar los países de la América Latina para preservar la seguridad de los Estados Unidos y los intereses de los ciudadanos norteamericanos colocados en la región, no se satisface sólo con instruir a los oficiales de las Fuerzas Armadas en las Academias de Panamá, ni enviando, con dinero de la Alianza para el Progreso, expertos en torturas para asesorar a las fuerzas policiales,¹⁰ sino que debía complementarse con la formación de una clase intelectual que satisfaga las aspiraciones de la burguesía local de poseer títulos universitarios, pero que fuera incapaz, por su deficiente formación de pensar de manera autónoma en los problemas del país; que fuera dócil y, en consecuencia, exenta de espíritu crítico.

La Universidad de la República resistió todos los embates que, orquestados desde la embajada, tendían a canalizarla por esos derroteros de dependencia cultural y científica, por lo cual, con base en los “asesores” que ella tenía en Montevideo, se comenzó una campaña de calumnias contra la institución, sus profesores y su dirigentes; campaña que habría de culminar con la bomba criminal que se hizo explotar en la Facultad de Ingeniería y que daría el pretexto para la intervención.

La intervención de la Universidad de la República se realizó ajustándose a normas precisas que son comunes a las que se han aplicado en las universidades de otras naciones del Continente (Brasil, Chile, Bolivia, El Salvador, Guatemala, etc.), desde la operación

¹⁰ El caso de Dan Mitrione, en Uruguay, precisamente, es esclarecedor al respecto.

que se desencadenara, pasando por la propaganda previa y posterior, hasta la adopción de los planes que ha instrumentado el imperio para el desarrollo dependiente de nuestras repúblicas: esto no es casual.

El rector interventor divulgó en agosto de 1975, a través de un reportaje en el diario *El Día*, que se solicitarían ocho expertos del BID para que seleccionaran las áreas prioritarias de desarrollo de la Universidad. Ello, y el replanteo del proyecto de la Armour Research Foundation de los Estados Unidos, posterior a la destrucción de los Institutos de la Facultad de Ingeniería, son dos ejemplos concretos de la participación de los Estados Unidos en este proceso dramático que viven el Uruguay y su cultura, desde hace treinta meses.

Y si son grandes los crímenes que la dictadura comete contra el ser humano, al torturarlo y asesinarle con las técnicas que instructores norteamericanos han introducido en el país, y que son de público conocimiento, no es menos grave el crimen de haber destruido el único centro de cultura superior que el país poseía.

El Uruguay se reconstruirá y los traidores que hoy disponen a su gusto del territorio que bordea el oriente del río Uruguay desaparecerán y serán juzgados por los crímenes a la humanidad y de *lesa patria*, que cometen con ferocidad que nadie podía sospechar que se incubara en mente de hombres, de militares, que hasta hace poco todos considerábamos como otros más de nosotros. Y en este juicio ocuparán lugar preponderante los crímenes cometidos contra la cultura nacional. Aunque ellos se extienden a todos los campos, desde la enseñanza primaria a la secundaria, al teatro y al cine, el cometido contra la Universidad, por su consecuencia para las posibilidades futuras del país —en menos de quince a veinticinco años será imposible reconstruirla de las ruinas en que la han sumido—, ocupará un capítulo fundamental en la pieza del fiscal acusador, que será todo el pueblo uruguayo.

LA CULTURA, COMO LA UNIVERSIDAD, ES PERSEGUIDA POR LA DICTADURA

La ofensiva de la dictadura uruguaya contra la cultura del país no se ha limitado a la que, como acabamos de ver, se realizó contra la Universidad. Ella se ha ejercido, con saña similar, contra los maestros de la enseñanza primaria, los profesores de la enseñanza media, humanística y técnica; contra el periodismo, el teatro, el cine y la actividad editorial.

Se ha dispuesto en las bibliotecas públicas la eliminación de textos de autores de todas las nacionalidades, que se arrojaron a la hoguera; se ha prohibido a actores y cantores nacionales y extranjeros (Joan Manuel Serrat entre estos) actuar en el país; y sus grabaciones, filmes y *tapes*, no pueden ni venderse ni irradiarse por la radio o la televisión, dentro del territorio nacional.

En el Uruguay de hoy constituye motivo de preocupación e inseguridad personal el tener en las bibliotecas privadas libros técnicos o humanísticos, porque se corre el riesgo de que algún sargento, en el allanamiento que nunca se sabe en qué madrugada se producirá, sin orden judicial ni garantías de ninguna especie, los clasifique, tal vez, como subversivos. Bibliotecas enteras de arte, de pediatría, de economía, de sociología y de historia, han sido destruidas: unas, porque llegó el sargento; otras, por precaución, antes de que llegue.

Tradicionalmente, allí donde se ha establecido el fascismo, se ha desencadenado una persecución implacable contra todas las manifestaciones culturales. Baste recordar las que se produjeron en Italia, Alemania y España, que fue donde el fascismo se manifestó en su forma original; o las que en nuestra América, como expresiones variadas del neofascismo, se han visto en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay.

No deja de ser oportuno recordar aquella insólita exclamación de los fascistas españoles comandados por

el general Millan Astray, hace cuarenta años, un 12 de octubre de 1933, en el Aula Magna de la Universidad de Salamanca: “¡Viva la muerte! ¡Muera la intelectualidad!”, que diera lugar a la serena pero firme respuesta del rector, don Miguel de Unamuno: “¡Venceréis, pero no convenceréis!”

Renegar de la vida y de la inteligencia, es renegar del hombre. El fascismo, ayer y hoy, ha sido siempre la ideología del antihombre. En España, asesina a Federico García Lorca; en Italia, expulsa a Enrico Fermi; en Alemania, deben expatriarse Thomas Mann y Albert Einstein: estos nombres, que damos sólo a título de ejemplos, son extraídos de una lista de ilustres que sería interminable reproducir.

El Uruguay no es una excepción a esta norma, y para ilustrarlo, mencionaremos un solo caso de reciente data: el cierre del grupo de teatro El Galpón, de Montevideo, dispuesto por la dictadura en febrero del presente año. Sus principales figuras: directores, actores, actrices y escenógrafos, han sido encarceladas y torturadas por el simple hecho de que la dictadura no pueda comprender que el grupo viva del apoyo del público de Montevideo y de Buenos Aires, el cual se disputa las entradas de sus espectáculos. Era El Galpón el más significativo de los grupos teatrales que surgieron en el país como consecuencia del exilio en el Uruguay, huyendo del fascismo, de la gran actriz y directora teatral española Margarita Xirgu, exilio que significó para el país de Bartolomé Hidalgo y de Florencio Sánchez, el renacimiento, hasta alcanzar los más altos niveles de expresión artística, de la actividad teatral.

Vaya como cierre de esta deprimente reseña sobre la acción del fascismo en el Uruguay, la transcripción de un fragmento del canto inicial de la obra teatral de Bartolomé Hidalgo, que bajo el título de *Sentimiento de un patriota*, se estrenó en la Casa de las Comedias, en Montevideo, en enero de 1816, cuando en los terri-

torios que hoy ocupa la República Oriental del Uruguay terminaba la lucha popular contra el imperio portugués primero y el brasileño después, el cual presionaba, antes como hoy, por extender sus fronteras hacia el sur. Preparando esa lucha, Bartolomé Hidalgo produjo estas estrofas de incuestionable actualidad, a más de ciento sesenta años de haber sido escritas:

Oficial: [Con espada, sable y látigo.]

¡Oh, Patria! ¡oh, Patria! ¿A tu sagrado nombre
quién resistir podrá? ¿Quién indolente
verá que los tiranos hoy tu seno
rasgan atroces, manchan insolentes?
¿Cuál es el que en la crápula sumido
a su pasión se entrega, y torpemente
deja que le redoblen las cadenas
y la cerviz al yugo le sujeten?
¿Quién que a ti pertenezca es tan ingrato
que te mire ultrajar impunemente?
¡De imaginarlo sólo me estremezco!

EDITOR

José A. Treviño Rodríguez
Centro de Estudios Sobre la Universidad
Antiguo edificio de Radio Universidad
C. U. México 20, D. F.

Imprenta Madero, S. A.
Impreso y hecho en México